

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-9168-2018
CARATULADO	: SALINAS/CONSEJO DE DEFENSA DEL
ESTADOI	

Santiago, veintiuno de Junio de dos mil diecinueve

VISTOS:

Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en Dr. Sótero del Río N° 326, oficina 1104, Santiago, en representación de Albina Higinia Salinas Vargas, laboratorista dental, domiciliada en Avda. Brasil N° 875, departamento 1104, Santiago, y de Marinka Luzvinia Salinas Vargas, dueña de casa, domiciliada en Calle Lluta N° 6885, Villa Las Bandurrias, Huechuraba, interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud Tapia, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, Santiago.

Expone, en cuanto a Albina Salinas Vargas, que militaba en las juventudes comunistas desde 1970, cuando tenía solo 13 años de edad, por lo que al 11 de septiembre de 1973 había cumplido 16. Dice que su padre, Alfredo Salinas Vásquez, trabajaba como contratista y era militante del mismo partido político, siendo detenido el día lunes 3 de noviembre de 1975, permaneciendo en calidad de desaparecido hasta la actualidad. Producto de lo anterior, habrían intervenido su casa, denunciando que eran perseguidas y acosadas constantemente.

Relata que en el contexto de la búsqueda de su padre por distintos recintos, es que comenzaron a ser perseguidas ella y su familia, de manera más violenta. Se refiere a episodios ocurridos en 1976, a finales de los 70, en 1985 y 1988, en los cuales fue víctima de torturas y tratos vejatorios de parte de distintos agentes del Estado. Entre los actos de que fue víctima menciona manoseos, amenazas y golpes, entre otros.

Describe que los años posteriores sufrió hostigamientos que califica como terribles y constantes, siendo perseguida donde ella fuera, por lo que se fue a



«RIT»

Foja: 1

Temuco con su hija de 11 años y su pareja de esa época, que también era perseguido, estando embarazada de 6 meses. Narra un hecho ocurrido en junio de 1988, cuando vivían en Temuco, cuando Carabineros la hizo concurrir, junto a su hija, a un cuartel que desconoce, por cuanto andaban buscando a su pareja y padre del hijo que estaba gestando, ocasión en que dice haber sufrido amenazas, lo mismo que su hija, y golpes en su estómago, en circunstancias que era notorio su estado de embarazo. En ese cuartel habría permanecido detenida por aproximadamente 10 días, en una especie de calabozo, con la comida y el agua muy restringida. Recuerda que despertaba permanentemente en pánico por lo que pudiera pasar a su hija. Refiere que durante esos días las sacaban -a ella y a su hija- para interrogarlas, todos los días. Refiere que posterior a estos sucesos, las dejaron botadas a unas cuadras de su casa, con evidentes síntomas de pérdida, debiendo concurrir al hospital a controlar su embarazo.

Plantea que luego de estos hechos, su pareja tomó la decisión de no vivir con ellas, para protegerlas, lo que significaba que se veían poco. Debido a esa situación, su hijo pudo ser reconocido recién a los 6 años, lo que habría influido negativamente en su vida y personalidad.

Indica que en septiembre de 1988, cuando volvió a Santiago a la casa de su madre y de su hermana Marinka, encontró un hogar deshecho y desesperanzado. Los problemas económicos eran gravísimos y se agravaron con su llegada, teniendo que soportar miseria y hambre.

Señala que dejó de estudiar desde el día que su padre fue detenido, cuando cursaba el segundo año de la enseñanza media, logrando completar su escolaridad recién en 1992. Dice que iba a estudiar trabajo social, pero que su hermano se quitó la vida, por lo que no pudo seguir estudiando, nuevamente. Producto de lo anterior, perdió una beca y su situación económica no le permitió seguir adelante. Plantea que con mucho esfuerzo y después de algunos años, pudo estudiar para ser laboratorista dental, pero que hasta el día de hoy, por su edad, no ha conseguido un trabajo.

Agrega que estuvo visitando la Vicaría de la Solidaridad, Fasic y Cintras, instituciones que la apoyaron con tratamiento psicológico para sobrellevar esta experiencia traumática. Precisa que todavía sigue con terapia, que no ha podido rearmar su vida y que este episodio también le ha causado consecuencias físicas, sufriendo constantes ataques al colon, estrés, alergias en la piel, dolor en sus huesos y problemas de insomnio.



«RIT»

Foja: 1

Afirma que ha sido calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II, lo mismo que sus hermanos Roberto Salinas Vargas y Marinka Salinas Vargas.

Respecto de esta última, Marinka Salinas Vargas, el abogado compareciente relata que también ha sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por agentes del Estado. Aduce que fue detenida, golpeada, torturada, privada de libertad y que hoy debe soportar las secuelas que se derivan de tan terribles experiencias, daños que persisten en todos los ámbitos de su vida.

Sostiene que no militaba en ningún partido político o movimiento, sino que buscaba a su padre, Alfredo Salinas Vásquez, detenido el lunes 3 de noviembre de 1975, como se dijo más arriba, sin que volviera a saber de él.

Indica que en el tiempo de desaparición de su padre, iba personal del Comando Conjunto a molestar a su casa, siendo vigilados establemente. Recuerda que en una ocasión estas personas ingresaron al domicilio para allanar y hacer destrozos.

Asevera que la desaparición de su padre repercutió en profundos problemas económicos, debiendo abandonar sus estudios y hacerse cargo de su hermano. Desde que tuvo 15 años, también salía a buscar a su padre y comenzó a involucrarse con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Relata que por su participación en esa comunidad, acudió a varias manifestaciones, terminando varias veces detenida, lo mismo que su hermana e incluso su madre.

Precisa que fue aprehendida en tres oportunidades, la primera, en 1982, por 5 días, siendo víctima de golpizas, insultos, amenazas de violación y tratos vejatorios por parte de carabineros de la 1° Comisaría de Santiago, que mantenían al grupo de detenidos sin comida, agua, ni acceso al baño. La segunda, en 1985, en que fue golpeada con pies, puños y bastones por personal de Gendarmería, para luego ser detenida por Carabineros de la 1° Comisaría de Santiago, donde sufrió maltrato psicológico, siendo dejada en libertad esa misma noche. La tercera vez, también en 1985, fue detenida junto a su madre y hermana, siendo llevadas a la 1° Comisaría de Santiago, donde sufrieron maltratos físicos y psicológicos, conforme describen.



«RIT»

Foja: 1

Manifiesta que posterior a estos episodios fue perseguida en forma permanente por funcionarios de los organismos de inteligencia, quienes la seguían para amedrentarla, se subían a la misma micro hasta su casa, golpeaban la puerta y le preguntaban por su padre, causándoles un gran dolor.

Reitera lo expuesto por su hermana, en cuanto a que su familia se desarmó luego de la desaparición del padre, viviendo gran pobreza económica, sin dinero para sobrevivir, sin poder estudiar, encontrándose el día de hoy sola, sin familia, porque su hermano falleció y ella no pudo rearmar su vida.

Invoca que ha sido calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II, al igual que sus hermanos Roberto y Albina Salinas Vargas.

Reitera que el hermano de ambas, Roberto Salinas Vargas, producto de una depresión severa como consecuencia de todo lo vivido por la familia y él personalmente, se quitó la vida.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, afirma que los hechos relatados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946, que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobada en 1998.

En relación a la responsabilidad del Estado, indica que el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los Tribunales de Justicia, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en ese sentido. Luego se refiere al artículo 1° inciso 4° de la Carta Fundamental, así como a sus artículos 5° inciso 2°, 6° y 7°.

Reflexiona sobre la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional, sosteniendo que en materia de derechos humanos tiene una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales. También lo hace sobre la



«RIT»

Foja: 1

improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

Se refiere, a continuación, a la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, por tratarse de materias que se encuentran regidas por normas de carácter público e internacional, citando al efecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio IV de La Haya.

Hace referencia a sentencias de la Excma. Corte Suprema en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, individualizando 131 causas en que el Máximo Tribunal ha emitido pronunciamiento.

En cuanto al daño, especifica que el sufrido por estas mujeres es de naturaleza moral, que se expresa en el dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima que les ha tocado soportar, daño que amerita ser reparado. Realiza un análisis de doctrina y jurisprudencia sobre el daño moral.

Pide se condene al Fisco de Chile al pago total de \$300.000.000 por concepto de daños morales, \$150.000.000 para cada una de sus representadas, más reajustes de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda hasta el pago efectivo de la indemnización, más intereses durante el mismo período, con costas.

Con fecha 31 de mayo de 2018 se notifica la demanda.

Con fecha 18 de junio de 2018 contesta el Fisco de Chile.

Alega la excepción de reparación integral, toda vez que la demanda sería improcedente, porque las actoras ya habrían sido indemnizadas. Reflexiona acerca del marco general de los resarcimientos ya otorgados y la complejidad reparatoria, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del entonces Presidente Patricio Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional, fueron los siguientes: "a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y, c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse". En lo relacionado con el segundo objetivo, plantea



«RIT»

Foja: 1

que la Comisión Verdad y Reconciliación o "Comisión Rettig", formuló en su informe final una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dice que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el sr. Presidente de la República envió al H. Congreso, que luego se convertiría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas". Por su parte y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, precisa que el ejecutivo, siguiendo el informe de la Comisión, entendió por reparación: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe".

Agrega que a dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas".

Concluye que la compensación de daños morales y la mejora patrimonial son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Asimismo, que una vez asumida esta idea reparatoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, que explican cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional, según asevera.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones: i) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; ii) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, iii) reparaciones simbólicas.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, manifiesta que diversas leyes la habrían establecido, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre de 2015, en concepto de: a) pensiones, la suma de \$199.772.927.770, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 (Comisión Rettig); b) pensiones



«RIT»

Foja: 1

por \$419.831.652.606, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); c) bonos por \$41.856.379.416, asignados por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y otros \$22.205.934.047 por la referida Ley N° 19.992; d) desahucios (bono compensatorio) por la suma de \$1.464.702.888, asignados por medio de la Ley N°19.123; y, e) bono extraordinario (Ley N° 20.874) por la suma de \$21.256.000.000. En consecuencia, al mes de diciembre de 2015 el Fisco habría desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.

En torno a las reparaciones específicas, señala que las actoras habrían recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. Precisa que la Ley N° 19.992 estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad; y de \$1.549.422 para beneficiarios mayores de 75 años. Adicionalmente, consigna que las demandantes habría recibidos recientemente el denominado aporte único de reparación de la Ley N° 20.874, por \$1.000.000.

Luego de referirse a las otras formas de reparación implementadas, sostiene en materia de identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, que de todo lo expresado podría concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH no solo han cumplido los estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera. Por tanto, considerando que la acción se basa en los mismos hechos y se pretende con ella se indemnicen los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de pago, por haber sido indemnizadas las demandantes en conformidad a la leyes N° 19.123 y 19.980.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva, que funda, en síntesis, en que según lo que se expuso en la demanda, la detención ilegal, prisión política y torturas que sufrieron las actoras ocurrieron desde noviembre de 1977 hasta el año 1988. Agrega que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, al 19 de julio de 2018, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.



«RIT»

Foja: 1

Alega la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma legal y, en subsidio, la excepción de prescripción de 5 años del artículo 2515, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la notificación, igualmente transcurrió con creces el plazo legal.

Sobre el particular, indica que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles y que, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, que en este caso no existe. En el mismo sentido, considera que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Recuerda que la prescripción es una institución universal y de orden público, manifestando que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil que la consagran y, en especial, de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general, para todo el ordenamiento jurídico y no solo para el ámbito privado. Posteriormente, dice que la jurisprudencia existente en la materia, citando fallos de la Excma. Corte Suprema que a su entender tendrían aplicación para el caso, no otorgarían a la indemnización de perjuicios, cualquiera sea su origen o naturaleza, un carácter sancionatorio, de modo que jamás puede de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, por ser su contenido netamente patrimonial. Así planteado, postula que no debe sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Asegura que la imprescriptibilidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos no contempla las acciones civiles derivadas de los delitos o crímenes de lesa humanidad ni prohíbe o impide la aplicación del derecho interno.

Por último, plantea que el monto pedido sería excesivo, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia, que habrían actuado con mucha prudencia. En subsidio, señala que respecto a la regulación del daño moral debe considerarse los pagos ya recibidos de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación N° 19.123 y 19.980. Alega la improcedencia del pago de intereses y reajustes.

Con fecha 28 de junio de 2018 la parte demandante evacúa el trámite de réplica.



«RIT»

Foja: 1

Esgrime la improcedencia de la excepción de pago, también denominada “excepción de reparación integral”, puesto que en el mejor de los casos, los montos que otorgan las leyes referidas solo constituyen pensiones de sobrevivencia por los actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Asevera que dichas pensiones en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por las demandantes, en su calidad de víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos, cometidas por agentes del Estado.

Destaca que el Fisco reconoce por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese abuso produjo un daño moral a la víctima directa que representa, y que a su juicio “los pagos” que realiza el Fisco implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que alega.

En relación a la Ley N° 19.123, invocada por la demandada como justificación para concluir el resarcimiento del daño moral, expone que en su artículo 2° se establece que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”, entendiendo que la palabra promover no es sinónimo de reparar y que, por consiguiente, en el caso de su representado, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece hasta hoy. Lo anterior, porque el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparado totalmente subsiste intacto. Además, asevera que el mismo cuerpo legal no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral. Cita jurisprudencia en fundamento de sus dichos.

Agrega que si se aceptara la tesis Fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de manera unilateral y arbitraria por el mismo responsable, es decir, por el Estado de Chile, quedando vedado a las víctimas discutirlo, lo que sería contrario a cualquier principio básico del derecho.

Respecto a las fuentes del derecho aplicables, indica que les parece jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil. Tal afirmación sería errónea, por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos



«RIT»

Foja: 1

humanos, incluyendo entre ellos a la Excelentísima Corte Suprema, citando a continuación variada jurisprudencia.

En relación al monto demandado, señala que no hay dinero que supla el dolor experimentado. Y en cuanto al cobro de reajustes, reitera lo expuesto en el libelo pretensor.

Con fecha 11 de julio de 2018 la demandada evacúa el trámite de duplica, reiterando sus defensas.

Con fecha 13 de agosto de 2018 se recibe la causa a prueba.

Con fecha 17 de junio de 2019 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del examen de los escritos de discusión, fluye que la tesis fáctica propuesta, respecto de las detenciones ilegales, torturas y tratos vejatorios sufridos por Albina Higinia y Marinka Luzvinia, ambas de apellidos Salinas Vargas, producto de la acción de agentes del Estado, verificadas durante el denominado “régimen militar” o simplemente la “dictadura”, son hechos no controvertidos.

En el Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, se registraron los casos de las demandantes con los números 7990 y 7992 respectivamente.

Por lo tanto, se tiene por establecido definitivamente y desde ya que las actoras fueron víctimas de detenciones ilegales, torturas y tratos crueles e inhumanos, al menos entre los años 1977 y 1988, en las ciudades de Santiago y Temuco, producto de la acción de agentes del Estado, siendo dicho acto constitutivo de un crimen de lesa humanidad.

SEGUNDO: Que, no obstante, se debe consignar que la parte demandante rindió la siguiente prueba.

Documentos.

1.- Copia de certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que registra a Albina Higinia Salinas Vargas como víctima reconocida por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II, y copia de la página 158 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política



«RIT»

Foja: 1

y Tortura, donde consta el nombre de la demandante en la “nómina de personas reconocidas como víctimas”, con el N° 7990.

2.- Copia de certificado emitido por Instituto Nacional de Derechos Humanos, que registra a Marinka Luzvinia Salinas Vargas como víctima reconocida por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II, y copia de la página 158 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde consta el nombre de la demandante en la “nómina de personas reconocidas como víctimas”, con el N° 7992.

3.- Copia de certificado emitido por Instituto Nacional de Derechos Humanos, que registra a Roberto Alfredo Salinas Vargas como víctima reconocida por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech II, y copia de la página 158 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde consta el nombre de esta persona en la “nómina de personas reconocidas como víctimas”, con el N° 7993.

4.- Copia de certificado de nacimiento de Albina Higinia Salinas Vargas, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, siendo su padre Alfredo Ernesto Salinas Vásquez.

5.- Copia de certificado de nacimiento de Marinka Luzvinia Salinas Vargas, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, siendo su padre Alfredo Ernesto Salinas Vásquez.

6.- Copia de certificado de nacimiento respecto de Roberto Alfredo Salinas Vargas, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, siendo su padre Alfredo Ernesto Salinas Vásquez.

7.- Copia de sentencia de la Excma. Corte Suprema, individualizada como: fallo de casación en episodio “Comando Conjunto, víctimas: Salinas, Pacheco y Gianelli. Rol N° 5831-2013; fallo de casación en episodio “Torres de San Borja”, víctimas: Montecinos Slaughter, Adler Zulueta, Díaz Agüero, y otros. Rol N° 2918-2013; fallo de la causa “Marcón con Fisco de Chile”, Rol 22.856-2015, de fecha 29 de Diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros sres. Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemuller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas; sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, causa Rol N° 1092-2015, de 14 de septiembre de 2015, que condena al Estado a pagar una indemnización de \$150.000.000 a los detenidos y torturados en Isla Dawson; y, sentencia de primera instancia del 9° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-432-2014, de fecha 15 de



«RIT»

Foja: 1

diciembre de 2017, que condena al Estado a pagar una indemnización de \$100.000.000 a Fidel Manríquez Méndez, detenido y torturado en el Estadio Nacional.

8.- Documento titulado: “Consecuencias de la desaparición forzada sobre la salud en familiares de detenidos desaparecidos”, suscrito por la dra. Nadia Saavedra, psiquiatra, y por las psicólogas Angélica Pizarro y Flavia Tamarasco, de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

9.- Copia de piezas del documento titulado: “Norma técnica para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990” del Ministerio de Salud.

10.- Documento titulado: “Efectos físicos y psíquicos en los familiares de víctimas de violaciones de Derechos Humanos”, suscrito por Elena Gómez Castro, directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ONG ILAS, de enero de 2018.

TERCERO: Que la parte demandada rindió la siguiente prueba documental:

1.- Copia de documento emitido por el Instituto de Previsión Social, que informa sobre un bono de reparación que beneficia a las hijas del causante Alfredo Ernesto Salinas Vásquez, las demandantes de estos autos, por un monto de \$10.000.000 para cada una, de acuerdo a Ley N° 19.123. En el documento se indica también que Albina y Marinka Salinas Vargas están calificadas como víctimas de prisión política y tortura de acuerdo a la Ley N° 19.992, en el último informe emitido por la Comisión Valech en agosto de 2011, y que como tal han recibido la pensión de reparación de la Ley N° 19.992, por \$12.977.536, aguinaldos por \$230.329 y el aporte único reparatorio de \$1.000.000.

CUARTO: Que, además, consta el ORD. N° 57759/2019, del Instituto de Previsión Social, de fecha 1 de marzo de 2019, que informa sobre “beneficios de reparación Valech” de Albina Salinas Vargas.

En este oficio se le comunica al Tribunal que la demandante -Albina Salinas Vargas- se encuentra enrolada como víctima de prisión política y tortura, y que ha recibido los siguientes montos como beneficiaria de las Leyes N° 19.992 y 20.874: i) \$14.606.846 por concepto de pensión de reparación Ley N°19.992 (periodo 01-10-2011 al 28-02-2019); ii) \$270.896 por aguinaldos; y, iii) \$1.000.000 por aporte



«RIT»

Foja: 1

único de reparación Ley N° 20.874, lo que totaliza la suma de \$15.877.742.

Además, se hace presente que Albina Salinas Vargas no recibe otros beneficios.

QUINTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia Ley les atribuye, según su naturaleza, salvo los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en el juicio.

En efecto, la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio corresponde hacerla en la forma dispuesta por el legislador. Por tanto, respecto de los instrumentos públicos, se advierte que emanan o fueron autorizados por un funcionario público, actuando en tal carácter y en materias de su competencia, contando con las formalidades que señala la ley, sin que la circunstancia de ser una copia les reste valor, precisamente por no haber sido impugnados.

Por tanto, los instrumentos públicos acompañados hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado, gozando de una verdadera presunción de autenticidad, tanto respecto del hecho de haber sido dados por las personas que comparecen en él, como –en su caso- de haber sido autorizados por la persona que actúa como ministro de fe pública. Además, los instrumentos públicos hacen plena fe en cuanto a su fecha.

Respecto a las declaraciones, el instrumento público hace plena fe en cuanto a que dichas declaraciones se efectuaron.

De cualquier manera y en una perspectiva general, se percibe como un hecho público y notorio que existe en la sociedad un consenso mayoritario acerca de que efectivamente se violaron los derechos humanos de centenares de personas durante el gobierno autoritario del Presidente A. Pinochet, conforme dan cuenta las condenas que se han sucedido desde que el país retomó el sendero democrático. Por lo tanto, coherente con la defensa desplegada por el Fisco, no hay motivo serio y grave para dudar acerca de la verdad de los hechos relatados en estos informes, especialmente los confeccionados por la Comisión Rettig y por la Comisión Valech II, acompañados –en lo pertinente- en copia.



SEXTO: Que, en cuanto a las excepciones de reparación integral y pago opuestas por el Fisco, debe decirse que consta en el oficio distinguido en el basamento cuarto, que el Instituto de Previsión Social ha pagado a Albina Salinas Vargas distintas cantidades por conceptos también diferentes, como “pensión de reparación” (Ley N° 19.992), “aguinaldos” y “aporte único de reparación” (Ley N° 20.874). vale decir, ha sido beneficiaria de las Leyes N° 19.992 y 20.874, en su condición de víctima reconocida de prisión política y tortura.

Con todo, la defensa de las actoras no contravino que hayan recibido los beneficios y transferencias que señala el Fisco en su contestación, por ser una consecuencia necesaria del hecho de haber sido incluidas en la nómina del informe realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que el hecho fundante de la responsabilidad pretendida es un delito de lesa humanidad, esto es, aquellos actos que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, incluyendo asesinato, exterminio, prisión arbitraria, violación, tortura, persecución política, desaparición forzada y otros actos inhumanos graves, calificación jurídica que no fue objeto de debate entre las partes, motivo por el cual se debe atender a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, integrados a nuestra legislación interna por disposición del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de las víctimas y otras personas a obtener la reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, puesto que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.

En este sentido, conviene recordar que los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, publicado el 5 de enero de 1991, establecen lo siguiente:

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado



«RIT»

Foja: 1

en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Por lo tanto, se constata una clara divergencia entre el contenido de las excepciones señaladas y lo dispuesto por la Convención Americana, debiendo estarse a esta última, atendida la naturaleza del ilícito, por cuanto la responsabilidad del Estado queda sujeta -en estos casos- a las reglas del derecho internacional, que excluyen –en todo aquello que sean contrarias a éste- las del derecho interno.

En consecuencia, atendido además que las leyes invocadas por la defensa fiscal no establecen verdaderas indemnizaciones sino que un conjunto de derechos y/o beneficios para las víctimas y sus familiares, como ocurre con las pensiones de reparación, medidas con las que el Ejecutivo y el Legislativo han intentado progresivamente hacerse cargo de un problema esencialmente humanitario, político y, en definitiva, histórico, no se avizora la existencia de incompatibilidad alguna con la indemnización pretendida en sede judicial, por ser diferente, siendo importante consignar que no está prohibido otorgarla y que así se ha hecho en múltiples sentencias.

OCTAVO: Que, en base a los mismos argumentos, debe agregarse que la imprescriptibilidad de la acción penal trae como consecuencia la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción civil, producto del transcurso del tiempo, desde que el hecho generador de la responsabilidad es al mismo tiempo un delito de lesa humanidad, vale decir, no un ilícito civil cualquiera. De otra manera resultaría que se permite perseguir en todo tiempo y lugar estos crímenes, pero no así la responsabilidad civil, lo que no se entiende si se considera que evidentemente la responsabilidad penal es de mayor entidad que la patrimonial.

Por lo tanto y como este Tribunal ha señalado en pronunciamientos anteriores, aplica aquello de que quien puede lo más, puede lo menos, no pareciendo razonable un sistema que desintegre las responsabilidades que emanan de un mismo hecho, cuando éste tiene la connotación aludida con anterioridad.

NOVENO: Que, así las cosas, descartadas las excepciones opuestas por la demandada, cabe destacar que respecto del daño moral la Excma. Corte Suprema lo ha conceptualizado como: “un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a



«RIT»

Foja: 1

las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos” (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4ª, pág. 168). Asimismo, ha sentenciado lo siguiente: “Que el daño moral, como todo daño, debe ser probado por quien sostiene haberlo padecido; al menos cuando es la base de la obligación de repararlo, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, en determinadas situaciones, por la naturaleza y características del daño material producido, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo. Así también ha sido resuelto (por ejemplo, Corte Suprema, rol 735-2015). En estas circunstancias se produce una alteración del peso de la prueba en cuanto, debiendo la víctima probar el daño, es el demandado quien tendría que probar que, debido a ciertos hechos o circunstancias, la víctima no sufrió efectivamente el daño que postula” (Rol N° 12.176-2017).

Pues bien, el presente caso es justamente uno de aquellos en que “el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo”. En efecto, se trata del caso de 2 hermanas que debieron padecer desde la más tierna edad, en un caso, y ambas en plena juventud, el dolor inconmensurable de haber perdido al padre, repentinamente, quien fuera detenido por las fuerzas de seguridad de la época, a quien buscaron, acompañando a la madre, en distintos lugares, sin lograr encontrarlo, averiguaciones que no fueron gratuitas para las víctimas, ya que debieron soportar amenazas, vejámenes y torturas, además de la prisión arbitraria.

Tales tratos, por cierto degradantes, que son consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario en ningún caso ni momento validó la adopción de procedimientos y medidas como las operadas en estas personas, abusando de una posición de poder y engendrando en las víctimas una sensación de incertidumbre persistente, que razonablemente no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha familiar, motivo que justifica prever la existencia de un daño extrapatrimonial y elevar su magnitud al rango de importante, puesto que, entre otras cosas, no se trató de un hecho puntual y acotado en el tiempo, sino que de una sucesión de acontecimientos que terminaron por consumir a estas hermanas en la desazón.

Pues bien, conforme al juzgamiento efectuado por el Tribunal de los hechos narrados, no cuestionados en su ocurrencia, y la afectación de las demandantes



«RIT»

Foja: 1

en su dimensión inmaterial, que se aprecia como permanente, se concluye en justicia el otorgamiento de una satisfacción de reemplazo, que en prudencia y equidad, a la luz del mérito de los antecedentes, se determina en la suma única y total de \$50.000.000 para cada una de las demandantes, que se deberá pagar más reajustes e intereses legales, desde que esta sentencia resulte ejecutoriada.

DECIMO: Que los documentos no considerados especialmente en nada inciden o alteran la decisión que se hará, siendo innecesarios, debiendo estarse a su valoración y a las razones por las que se acogerá la presente demanda.

UNDECIMO: Que no se condenará en costas a la parte demandada, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República; I. b) de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 1437, 1698, 1699, 1700, 1702, 1706, 2314 y siguientes, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 170, 342 y 384 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que se rechazan las excepciones de reparación integral, pago y prescripción alegadas por la parte demandada.

II. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se condena a la parte demandada a pagar \$50.000.000 a cada una de las demandantes, por concepto de indemnización por daño moral, más reajustes e intereses.

III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-9168.2018

Dictada por don Matias Franulic Gomez, Juez Titular del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiuno de Junio de dos mil diecinueve**



